



Revista de Estudios Sociales

07 | 01/09/2000

Colombianos en la diáspora (I)

Espejismos, ambigüedades y desmemorias: las incapacidades del Estado para imaginar una nación

Santiago Villaveces-Izquierdo



Edición electrónica

URL: <http://journals.openedition.org/revestudsoc/29098>

ISSN: 1900-5180

Editor

Universidad de los Andes

Edición impresa

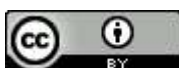
Fecha de publicación: 1 septiembre 2000

Paginación: 91-99

ISSN: 0123-885X

Referencia electrónica

Santiago Villaveces-Izquierdo, « Espejismos, ambigüedades y desmemorias: las incapacidades del Estado para imaginar una nación », *Revista de Estudios Sociales* [En línea], 07 | 01/09/2000, Publicado el 13 diciembre 2018, consultado el 28 abril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/revestudsoc/29098>



Los contenidos de la *Revista de Estudios Sociales* están editados bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.

Espejismos, ambigüedades y desmemorias: las incapacidades del Estado para imaginar una nación'

Santiago Villaveces-Izquierdo*

*"As we move from signification to it's cause,
signification is conceived of as the effect-of-sense:
it is the imaginary experience-of-meaning whose
inherent constituent is the mis recognition of its
determining cause, the formal mechanism of
the signifying structure itself"*

Slavoj Zizek

La creciente intensificación de la guerra interna en Colombia durante los últimos diez años ha sido un factor decisivo en el desarraigo de grandes segmentos de la población rural del país. Para 1998 se estimaba que 1.5 de los 40 millones de colombianos eran desplazados internos. A pesar de la magnitud y persistencia de esta situación, la falta de un reconocimiento oficial sostenido y comprometido que dé cuenta de la profundidad de la crisis ha imposibilitado tanto el planteamiento de políticas viables y realistas, como de una ayuda consistente y coherente del gobierno para con los desplazados. La debilidad de la respuesta gubernamental, tal como lo sugieren agencias nacionales e internacionales, radica en la "invisibilidad oficial" de la crisis. En este artículo pretendo aportar más argumentos para ese debate. La ausencia de variables cuantitativas que reflejen las dinámicas y el impacto de este dramático flujo demográfico ha producido un laberinto estadístico que aleja a la crisis de las esferas de debate político y de toma de decisiones. A lo largo de este ensayo sugiero que esta "invisibilidad oficial" no sólo subestima la magnitud del desplazamiento interno en Colombia, sino también fragiliza aún más la ya marginal labor de los defensores de derechos humanos, y qué decir del agenciamiento de los propios desplazados.

En este artículo exploro el lado 'performativo' de las narrativas del Estado enfatizando en el doble y ambiguo movimiento que nace de la proyección de imágenes tolerantes e incluyentes de la alteridad, simultáneamente

acompañado por estrategias paralelas que diluyen o eliminan el agenciamiento político de esa misma alteridad¹. El desplazamiento interno en Colombia es "autenticado" por el Estado como mercancía con un valor de cambio político, mientras que simultáneamente se mantiene "oficialmente invisible" para los propios sistemas de clasificación del Estado. Al relacionar el uso de variables demográficas con la construcción narrativa que se hace desde el Estado sobre qué es nación, pretendo mostrar cómo la gramática de las estadísticas oficiales es utilizada para mantener tanto una visión de un Estado capaz de controlar la violencia generalizada, como la imagen de una nación menos fragmentada y caótica de lo que realmente es.

Ante todo, la construcción, uso e interpretación de las variables estadísticas constituye un espacio simbólico de permanente tensión y negociación entre el Estado y los diversos actores sociales, hegemónicos y subalternos, que habitan la nación y sus periferias. A lo largo de este ensayo intento llamar la atención sobre la urgente necesidad de que las estrategias y categorías de censo sean más sensibles a las dinámicas sociales, así como a temas altamente politizados que son en sí mismos lugares de constante tensión y negociación entre los sectores marginales y hegemónicos de la sociedad. Después de todo, las variables demográficas parten y alimentan estructuras de poder y saber que constituyen campos de competencia política y en ciertos casos, intentos desesperados de supervivencia humana.

Contornos de una tragedia silenciada

*"En 1988 por cada colombiano asesinado en una
masacre 75 eran desplazados, en su mayoría
mujeres, niños y adolescentes".*

Codhes

En los últimos diez años Colombia ha sido conocida en el ámbito internacional como el país más violento del

* Versión original publicada en inglés. "Internal Diaspora and State Imagination: Colombia's failure to envision a nation". Publicado en Dharmalingam, Sholkamy, Szreter(Eds.). *The Qualitative Dimension of Qualitative Demography*, Londres, Oxford University Press (en imprenta). Este artículo fue originalmente presentado en el seminario "Social Categories in Population Studies", organizado por la International Union for the Scientific Study of Population y el New Arab Demography Project, American University, Cairo, 1999. Agradezco a Carolina Isaza la traducción de este texto al español.

** Economista, Ph .D. en Antropología de Rice University, profesor visitante del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas/Programa de Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad do Estado do Río de Janeiro, Brasil.

1 Con ello busco desplazar la atención del proceso de significado, entendido como construcción de sentido, hacia aquello que causa significado, es decir, el efecto de sentido o en términos psicoanalíticos la causa significante: ¿qué es aquello que moviliza las características *performativas* de las narrativas que el Estado construye y moviliza? Aquí entiendo los censos así como otros instrumentos de clasificación oficial (estadísticas, mapas, leyes, museos y monumentos) como herramientas narrativas con las que el Estado construye relatos sobre la nación y sus periferias, sobre la violencia y sus consecuencias. (Para una discusión sobre la causa significante véase S. Zizek *For they know not what they do. Enjoyment as a political factor*, Londres, Verso, 1991; O *Mais Sublime dos Históricos*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Eds., 1991. Sobre los sistemas de clasificación del Estado véase S. Lazarus, *Anthropologie du Nom*, París, Editions du Seuil, 1996).

hemisferio occidental. El procesamiento y distribución de drogas ilícitas en alquimia con pobreza y un legado de aguda e irresuelta violencia política, han generado progresivas e incrementalmente virulentas ondas de terror. La violencia política ha sido un problema fundacional a lo largo de la historia colombiana que se hizo endémicamente visible y descentrado a partir de la época de La Violencia (1945-1965). En los albores del siglo XXI los intentos de consolidar un Estado-nación basado en principios democráticos de integración nacional, han sido sistemáticamente truncados por las mismas prácticas autoritarias que han esculpido los paisajes sociales, culturales y políticos del país durante los últimos cincuenta años. Hoy la situación no podría ser más compleja: un país fragmentado territorialmente en busca de sí mismo, desmembrado por una guerra visceral y sin un proyecto nacional cohesivo. Masacres, secuestros, bombardeos, torturas y desapariciones, perpetradas igualmente por todos los actores en conflicto, han dejado al país en un estupor colectivo. La danza macabra del miedo, el silencio y la indiferencia ha cobrado un alto precio en las vidas de la población rural y urbana. Especialistas en salud pública señalan que los niveles más altos de mortandad en Colombia provienen hoy en día de la violencia².

La profunda fragmentación del país, así como la problemática y debilitada presencia del Estado en la mayoría del territorio nacional, han dado paso a una geografía política, opaca y en ocasiones demasiado oscura para ser comprendida por completo, que nutre una violencia cada vez más intensa y descentrada. Hoy por hoy en un sinnúmero de comunidades tanto urbanas como rurales, la población civil se siente aterrorizada ante la presencia de cuadrillas armadas a quienes no puede identificar de forma alguna. A lo largo y ancho de Colombia estos espacios se han convertido en zonas liminales³, que cambian constantemente con las ya rápidamente mutantes topografías políticas locales y regionales. Zonas liminales en donde sus habitantes han aprendido a vivir bajo el terrible peso de una incertidumbre existencial, sin saber claramente a qué orden adscribirse, a

qué orden pertenecen, si acaso todavía a alguno. Estos desplazados se han convertido en extraños en su propia tierra: siempre desconfiando de los demás, con sus lazos comunales y sociales resquebrajados y rodeados por el insondable miedo. Cuando esa precaria estabilidad se hace insostenible, cuando las ya anunciadas muertes, persecuciones, desapariciones y masacres invaden por fin la vida cotidiana, se inicia un éxodo más, como si acaso ya no se hubiesen iniciado desde tiempos inmemoriales. Dentro de estas zonas liminales las poblaciones más vulnerables son sin duda las comunidades rurales de campesinos y jornaleros. Castigados a la vez con las miserias de la pobreza y la brutalidad de múltiples violencias, estas comunidades, atrapadas en guerras desde hace años ajenas a sus propias luchas, sólo tienen la opción de continuar en su desgarrado y silencioso peregrinaje.

Hoy se estima que en el período 1985-1998, 1.5 millones de personas (cerca del 4% de la población del país) han sido desplazadas por la violencia. En 1996 el Comité Consultivo para los Derechos Humanos de los Desplazados (Codhes) estimaba que 86% de los desplazados vivían en los cinturones de miseria urbanos, que 53% eran mujeres, 55% menores de edad, 32% desempleados. Defensores de derechos humanos creen que la mayoría de los desplazados son viudas y huérfanos que tras perderlo todo tienen que aferrarse a cualquier oportunidad para sobrevivir. Desposeídos de su tierra y de sus mundos de vida, estos parias llenan los caminos de una silenciada geografía que los lleva errantes de un lugar a otro, como en una peregrinación trágica interrumpida sólo por una brutal absorción a los submundos de la miseria urbana⁴.

La sobrecogedora carga emocional y psicológica que deben soportar y administrar los desplazados, especialmente los niños, viudas y ancianos, los sitúa en una posición especialmente vulnerable: además de lidiar con el peso de vidas rotas y truncadas, de memorias traumáticas e indecibles, los desplazados pierden el sentido de pertenencia, de identidad colectiva e individual. Esta fragmentación profunda del ser, junto con la pérdida de todas las referencias sociales y comunales, conlleva una sensación paralizante de desarraigo, en ocasiones demasiado fuerte para permitir la reconstrucción de mundos de vida plenamente significativos. Habiendo perdido todos sus derechos como individuos y

2 Organización Panamericana de la Salud, *Health in the Americas*, Vol. 2, Washington, 1998; Villaveces, A. et al., "Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in 2 Colombian Cities", en *JAMA*, Vol. 283, No. 9, 2000, págs. 1205-1209.

3 Entiendo por zonas liminales espacios donde las condiciones sociales y existenciales, tanto de individuos como de grupos, son puestas en paréntesis, desancladas y dejadas en una especie de ambigua suspensión a partir de donde el orden social es subvertido por poderes paralelos todavía en formación, indeterminados, paradójicos y poco evidentes.

4 Según Codhes en 1996 Bogotá albergaba el 27.3% del total de desplazados, seguida por Medellín con el 19.66%.

como ciudadanos, los desplazados quedan condenados al estigma de ser fuente de desorden social y de barbarie. Tras alcanzar una parada en su tortuoso viaje estos parias son condenados a habitar una geografía oculta de miedo en la que la supervivencia diaria parecería estar sólo posponiendo una otra muerte en silencio y abandono. Un círculo vicioso sin duda, que constantemente re-inscribe tanto la existencia fantasmal de estas poblaciones, como la desmemoria pública sobre sus destinos.

Desde mediados de los noventa la intensificación del conflicto ha llevado a desplazamientos a gran escala. Miles de colombianos han huido hacia Ecuador, Panamá y Venezuela en donde los respectivos gobiernos han insistido en tratarlos como simples inmigrantes indocumentados, negándoles protección y asistencia, sin mencionar cualquier consideración como refugiados o exiliados políticos; condición que por cierto requiere de un otro peregrinaje por las burocracias de las organizaciones de asistencia humanitaria. No se sabe mucho sobre la suerte y el número de refugiados colombianos en los países vecinos excepto cuando ocurren migraciones masivas repentinas. Para la mayoría de la población colombiana, ya bastante golpeada con la guerra interminable y la profunda recesión económica de los últimos años, el problema de la migración forzada entra tangencialmente en su mundo, si es que acaso lo hace. Es particularmente diciente el que hasta ahora se sepa tan poco acerca de los procesos de recomposición social, cultural y comunitaria de las poblaciones desplazadas.

Sólo recientemente ha habido un esfuerzo para llamar la atención general sobre la situación de los desplazados. En 1995 un informe patrocinado por la Conferencia Episcopal Colombiana reveló que uno de cada 40 colombianos era forzado a migrar debido a la violencia política. El informe subrayaba que en el período de 1985 a 1995, 586.261 personas se habían visto obligadas a abandonar su hogar⁵. Desde los tiempos de La Violencia varios sacerdotes católicos se han pronunciado como testigos de excepción, y en ocasiones se han atrevido a denunciar todo tipo de violaciones a la dignidad humana. La Conferencia Episcopal Colombiana, apoyándose en la red de parroquias extendida a lo largo del país, construyó estadísticas preliminares en las ya reconocidas zonas de guerra. El informe de 1995 se convirtió en un hito al ser el primer esfuerzo serio y sistemático para

entender, a escala nacional, la magnitud del desplazamiento forzado. Adicionalmente el informe reflejaba el interés creciente de organizaciones religiosas y civiles en la crisis, aportando datos que expandían los análisis de la unidad de investigación en derechos humanos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), complementando las estadísticas preliminares del Codhes y ofreciendo nuevas informaciones a la Comisión Andina de Juristas. Actualmente estas tres organizaciones independientes, junto con el recién creado Grupo de Apoyo a los Desplazados ofrecen, bajo su propio riesgo, un panorama más comprensivo del problema.

Desde la adopción en 1960 de la Doctrina estadounidense de Seguridad Nacional en América Latina, el activismo social ha sido invariablemente relacionado con subversión. Todavía hoy en Colombia las actividades de las organizaciones no gubernamentales sufren ese arraigado y naturalizado estigma: con una pasión visceral e irracional los organismos de seguridad del Estado todavía ven a las organizaciones de defensa de los derechos humanos como fachadas de las guerrillas de izquierda. A pesar de ese ambiente hostil, las organizaciones no gubernamentales han aprendido a administrar sus riesgos, en particular a través de la propia visibilidad que han logrado en circuitos internacionales y más recientemente entre simpatizantes miembros de foros políticos extranjeros (Congreso de Estados Unidos, Parlamento Europeo). Los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales en crear redes de apoyo internacionales no sólo le han dado voz a la crisis en el seno de importantes grupos de presión extranjeros, sino también han conseguido acceso a una serie de fondos que aseguran la continuidad de los esfuerzos estadísticos diseñados para dar razón de las dinámicas del desplazamiento forzado⁶. En efecto, la escalada de la crisis fue seguida por una intensificación de las presiones diplomáticas internacionales que resultaron en la apertura, en 1997, de una oficina en Bogotá del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde entonces las Naciones Unidas y la Comunidad Económica Europea, junto con importantes agencias internacionales han intensificado sus esfuerzos en la

5 Conferencia Episcopal Colombiana, *Los desplazados por la violencia en Colombia*, Bogotá, Editorial Kimpres, 1995.

6 En 1998 Codhes recibió fondos internacionales para la elaboración de informes sobre el desplazamiento forzado y los derechos humanos en Colombia provenientes de UNICEF, de ECHO (Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Económica Europea), de Christian Aid y del Fondo Noruego de Derechos Humanos. Pax Christi, los gobiernos belgas y suizo, las fundaciones Ford y Rockefeller han ayudado a otras organizaciones no gubernamentales involucradas con derechos humanos.

asignación de recursos humanos y financieros, en procura de una atención más comprensiva e integral para con las poblaciones desplazadas. Infortunadamente la atención internacional no ha servido para contener los acosos, amenazas, detenciones y en algunos casos asesinatos de activistas de derechos humanos, de académicos que se atreven a hablar contra las atrocidades, de funcionarios locales, regionales e incluso nacionales comprometidos con labores humanitarias. Hoy los desplazados en Colombia somos casi todos.

Este cuadro es bastante irónico cuando se considera el extenso aparato que el Estado ha montado alrededor del tema de los derechos humanos. Existen varias agencias independientes, no sujetas a la interferencia de la rama Ejecutiva, que incluyen al defensor del Pueblo y su cuerpo de defensores públicos, los despachos del fiscal general de la Nación y del procurador general de la Nación y sus unidades de derechos humanos. Adicionalmente, la rama Ejecutiva dispone de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y unas oficinas de derechos humanos en el Ministerio de Defensa y del Interior. No obstante, ante la magnitud de esta crisis las respuestas del Estado han sido por mucho tímidas y parciales. La crítica principal a la reacción paquidérmica del Estado ha sido su cortoplacismo, su falta de compromiso y el maltrato para con las poblaciones desplazadas. Durante los últimos tres gobiernos la respuesta estatal al desplazamiento ha sido prácticamente inexistente. Relegadas como un problema de las autoridades locales o regionales, las poblaciones desplazadas fueron abandonadas a su propia suerte.

En 1997 se despertaron nuevas esperanzas con la aprobación por parte del Consejo Nacional para la Política Económica y Social (Conpes) de un Sistema para la Atención Integral de los Desplazados por la Violencia, y con la creación de la Oficina del consejero presidencial para la Atención Integral a los Desplazados. Se esperaba que siguieran directrices oficiales para una articulación de políticas a nivel local, regional y nacional, así como lineamientos de acción para asistencia humanitaria, ayuda socioeconómica y programas de contingencia. Por el contrario la respuesta del gobierno a la crisis permaneció inamovible. La asistencia ofrecida por el gobierno se mantuvo en una ridícula ayuda humanitaria de 90 días tras la cual los desplazados eran o bien dejados a su suerte o estimulados a volver a sus tierras de origen, sin las garantías necesarias de seguridad. En Marzo de 1998 la oficina en Bogotá del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó

fuertemente a la administración Samper (1994-1998) por su irresponsable manejo de la crisis. Con la elección de Andrés Pastrana (1998-2002) se quisieron implementar directrices políticas que garantizaran un retorno digno de los desplazados a sus lugares de origen. Hasta la fecha la administración Pastrana ha sido acusada por las organizaciones no gubernamentales y por los mismos desplazados de construir un marco político demasiado general y abstracto que carece de la claridad suficiente para implementar en la práctica acciones estatales efectivas para con los desplazados.

Tras estos niveles de abstracción y ambigüedad oficial hay un verdadero laberinto estadístico que esconde la magnitud real de la crisis tanto de esferas de toma de decisión como de debates públicos abiertos, comprometidos e informados. Según lo reportado por una organización no gubernamental, el principal problema para los funcionarios del gobierno durante este año ha sido la falta de una base de datos comprensiva y funcional para cuantificar e identificar las poblaciones desplazadas⁷. La administración parece haber entendido finalmente que sin tales herramientas estadísticas la implementación de programas para la distribución de tierras, rehabilitación física y psicológica, y asistencia socioeconómica es prácticamente inviable. Más aún, este vacío estadístico mantienen ocultas del debate público las hondas ramificaciones que la crisis tiene sobre otros frentes: la contrarreforma agraria, impulsada por dineros de la droga y por la confrontación entre guerrilla y paramilitares, se ha profundizado por la falta de información sobre tierras abandonadas por los desplazados; el impacto real de la guerra y el desplazamiento en economías rurales es todavía desconocido, así como sus efectos a largo plazo sobre la oferta agrícola; las conexiones entre la marginalización oficial y la estigmatización de los desplazados y su extrema pobreza con el incremento de la violencia urbana están aún sin explorar. En este momento la base de datos más comprehensiva es la de Codhes, aunque todavía parcial e incompleta, pero su uso para la implementación de políticas públicas integrales es limitado ya que ésta no fue diseñada para llenar el vacío dejado por lo que son responsabilidades propias del Estado⁸. El reto actual es construir instrumentos

7 Grupo de apoyo a organizaciones de desplazados, "La superación de la crisis de derechos humanos y la política frente al desplazamiento interno no deben supeditarse al proceso de negociación política", en *Éxodo*, No. 11, Bogotá, 1999.

8 Codhes utiliza principalmente información recogida durante 1996-1997 a partir de encuestas en 1.020 hogares de desplazados por la violencia. La

estadísticos "oficiales" que le den al gobierno un mapa completo de la crisis y con ello, un terreno concreto para la negociación política. Pero ¿por qué el Estado ha sido tan lento en reconocer la importancia de visualizar la crisis en su verdadera magnitud? ¿Cuál es el compromiso cultural de las instituciones del gobierno y de las esferas de toma de decisiones con los desplazados?

Censo y la imaginación del Estado

"Like other aesthetic forms, the nation-state too promises to bring forth order out of disorder, mold form from that

Valentine Daniel

Como ya fue señalado por Benedict Anderson, desde la época de las colonias europeas en África, Asia y las Américas, las prácticas de trazar mapas de los territorios y de sus gentes fueron constitutivos de los procesos tanto de formación de Estado como de construcción de nación. Junto con los museos, las leyes, los monumentos y los mapas, el censo ha sido una herramienta fundamental para ordenar flujos, de otra manera invisibles, de fuerzas económicas y sociales que moldean constantemente lo que consideramos como nación. Como tal, el censo puede entenderse como una construcción simbólica, como una forma de conceptualizar un territorio mediante la creación de un paisaje ontológico (la nación) moldeado a través de relaciones numéricas y conceptuales. La topografía demográfica que resulta de este ejercicio ofrece no sólo una lente particular por la cual se lee la realidad, sino sobretudo un mapa que refleja el desenvolvimiento estructural y funcional de las instituciones estatales. Para el Estado "el censo llena políticamente la topografía formal del mapa"⁹. El censo es pues un instrumento a través del cual el Estado visualiza y actúa sobre la nación.

Desde perspectivas antropológicas y sociológicas una nación puede entenderse como un complejo sistema de significación cultural. La nación, entendida como mapa de sentido, enlaza instituciones y actores sociales produciendo un mosaico, modelado en el tiempo y el espacio, que se presenta como una sola totalidad. Este sentido de continuidad en la historia, de desenvolvimiento temporal del

progreso nacional, se construye a través de narrativas que parten principal, aunque no exclusivamente, del Estado. Como H. Bhabha señala, el Estado al construir narrativas de nación construye sujetos y objetos que habitan esas narrativas. Desde la perspectiva del Estado, estos sujetos y objetos se convierten entonces en los legítimos receptáculos y verdaderos agentes constituyentes de la nación; es decir, en las piezas que encajan en ese rompecabezas que ordena y da forma a lo que de otra manera parecería ser amorfo y caótico. Con esto Bhabha incita a pensar sobre las "complejas estrategias de identificación cultural y alocución discursiva que funcionan en nombre de la gente' o la nación' y que hacen sujetos y objetos inmanentes de un espectro de narrativas sociales y literarias"¹⁰. Y ¿qué es el censo sino otro artefacto con el cual el Estado identifica y apela a la nación y sus gentes? Esta pregunta retórica no tiene, por supuesto, una única respuesta. Parece mucho más productivo pensar el censo como una válvula reguladora, como una construcción política de doble filo, que funciona simultáneamente como ventana y como puerta.

Como ventana, el censo enmarca para el Estado una visión particular de la nación, es decir, se constituye tanto como ojo del Estado así como espejo de sus propios valores políticos y culturales. A través del uso del censo el Estado determina qué es lo que ve, cómo es que ve y sobre todo lo que elige no ver. Y es justamente en la entremezcla de esta trilogía donde se diseñan políticas, se asignan recursos, se perciben problemas y se piensan soluciones. Pero como sugerí antes, ésta es sólo una respuesta parcial. Para los demás actores sociales, las variables del censo actúan como una puerta, como un umbral que asegura visibilidad y por ende apalancamiento político, como un lugar de lucha y negociación. En tiempos en que el acceso pleno a la ciudadanía y sus derechos correspondientes no puede darse por sentado, los nodos de encuentro entre el Estado y los otros actores sociales se convierten en espacios ventajosos para la contienda política. El censo como puerta es uno de esos nodos. Como tal, el censo también puede ser pensado como un punto de entrada al campo visual del Estado, esto es, como un artefacto que localiza, fija y asegura la existencia de ciertos actores sociales como agentes políticos legítimos. El censo como puerta "auténtica" y "válida" el agenciamiento del sujeto al proveerlo de una representación reconocible e

recolección de datos se llevó a cabo con la ayuda de trabajadores sociales locales, funcionarios de organizaciones no gubernamentales, peritos y autoridades locales.

⁹ Anderson, B. *Imagined Communities*, Londres, Verso, 1993, pág. 174. Hay versión en español.

¹⁰ Bhabha, H. "Dissemination: Time, narrative, and the margins of the modern nation", en *Nation and Narration*, Londres, Routledge, 1990, pág. 292.

inteligible para el Estado, representación que fundamenta y posibilita justamente la negociación política. En este caso el sujeto es percibido por el Estado en su "totalidad", es decir, como participante activo en el desenvolvimiento de las narrativas de progreso nacional, como receptor de derechos, como ciudadano pleno con agenciamiento político. Pero éste es sólo uno de tres posibles escenarios. Los otros dos restantes se configuran a partir del inestable terreno de la lucha política. Al develar la construcción del censo a través del despliegue de los relatos de nación es fácilmente perceptible cómo históricamente la inclusión de variables corresponde a la mal llamada "madurez" de los actores políticos emergentes. Tales son los casos que preceden la conquista de un agenciamiento político. Las historias poscoloniales están llenas de tales ejemplos: comunidades indígenas y negras, mujeres, minorías religiosas, todos por largo tiempo ignorados por las autoridades coloniales, re-emergen como actores políticos, como sujetos que ahora forman "auténticamente" parte de la topografía política de la nación. El tercer escenario es el de los desplazados internos, el caso de los "miserables de la tierra" como F. Fanón llamó a las periferias de nuestras naciones. Para estos condenados todas las puertas están cerradas: su marginalización física y social es realzada y reafirmada por órdenes simbólicas y culturales excluyentes. Despojados de sus derechos, su ciudadanía, su agencia, estos excluidos se tornan en cargas invisibles que nunca se ajustan del todo a los parámetros de nuestra propia "comunidad imaginada". Si mucho, los miserables de la tierra llegan a ser tímidamente reconocidos por el Estado, no sin dosis de vergüenza, como manchas inevitables en el mosaico de la nación. Y como manchas estos parias son literalmente arrojados a las márgenes de los relatos míticos de la construcción de nación, de las narrativas contemporáneas que dan cuenta del desarrollo de un proyecto de nación y de los paisajes que se visualizan para el futuro de la misma.

El 14 de octubre de 1953, la administración de Rojas Pinilla creó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) encargado de definir y desarrollar un sistema nacional de estadística. Con anterioridad, diferentes sectores del Estado recolectaban su propia información pero nunca antes se había incentivado la creación de un sistema de estadísticas socio-demográficas. Desde entonces el Estado ha reconocido y recolectado indicadores básicos socio-demográficos que incluyen censos de población discriminados por género, edad, lugar de residencia, educación y actividad económica; registros de nacimiento y

muerte; y flujos migratorios. Estos últimos registran sólo el lugar actual de residencia, el lugar de nacimiento y el lugar de residencia cinco años antes de la encuesta. Los censos de 1951 (realizado por la Contraloría General de la Nación), de 1964, 1973, 1985 y 1993 muestran una nación con tendencias y flujos demográficos ajustados a las expectativas generadas por los procesos de modernización, no revelan por ende, la inmensa recomposición migratoria disparada por olas constantes de terror en la Colombia rural. Las estadísticas carecían de la sofisticación necesaria para revelar las múltiples causas de estos movimientos migratorios (en particular aquellas relacionadas con violencia, amenazas y terror) y en consecuencia visibilizar la génesis de la actual geografía del desplazamiento forzado. En la medida en que la intensificación de la guerra progresa, las estadísticas parecen estar perdiendo aún más su bajo grado de contabilidad. Mientras que segmentos cada vez mayores del país son arrojados hacia una guerra caótica y más municipios caen bajo el control de los grupos paramilitares o guerrilleros, mayores son las restricciones que recaen sobre los equipos del Dane. El Dane ya ha reconocido varias veces que los dos últimos censos agrícolas y ganaderos han sido incompletos debido a amenazas y en ocasiones desapariciones de sus empleados, y espera mayores restricciones para el próximo censo de población durante el 2001. Poco parece haber cambiado durante los últimos 50 años en Colombia la manera de construir estadísticas socio-demográficas. Si era apropiado decir que en los años sesenta varias regiones de las cuencas del Amazonas y el Orinoco colombianas eran invisibles a las bases estadísticas, hoy la situación no es en absoluto mejor¹¹. Al profundizarse las guerras en Colombia más de un tercio del territorio parece estar fuera de límites para cualquier tipo de recolección de datos.

En 1967 Gabriel García Márquez evocaba en *Cien años de soledad* las miserias de las comunidades periféricas, siempre apartadas y a la deriva del proyecto de nación. La mítica Macondo, una metáfora poderosa de lo que se ha convertido Colombia, es azotada por una misteriosa peste que lleva a la desmemoria, a la amnesia colectiva. En un intento por aferrarse al mundo tal como lo conocían, los habitantes de Macondo tratan desesperadamente de capturar la realidad nombrándola:

11 Según lo reportado por *El Tiempo* en su edición del 13 de julio del 2000, Dane estima que aproximadamente 9 millones de colombianos no se encuentran registrados y, por consiguiente, no existen para el sistema estadístico nacional.

Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido: Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. En la entrada del camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos. Pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral, que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, que les resultaba menos práctica pero más reconfortante¹².

Es sorprendente que a pesar de una ruptura estructural y sistemática de la vida cotidiana en amplios sectores urbanos y rurales de Colombia el Estado, tal vez tan embrujado como los habitantes de Macondo, opte por olvidar. Pero ¡cuidado! El olvido y la desmemoria no son inocuos y en la mayoría de los casos tampoco son actos inocentes.

Durante los últimos cinco años las organizaciones no gubernamentales han llamado la atención internacional a lo que adecuadamente llaman la "invisibilidad oficial" del desplazamiento forzado en Colombia. La diáspora interna colombiana ha producido una profunda incisión en el tejido social, cultural y demográfico y cambios de esta magnitud ya no pueden pasar simplemente por "inadvertidos". El reto estadístico iniciado por las organizaciones no gubernamentales es sin duda un punto de partida para empezar a entender las dimensiones cuantitativas de la crisis.

Afortunadamente este esfuerzo ha estado acompañado por algunos intentos cualitativos de hacer visibles los efectos del desplazamiento en la construcción de nuevos vínculos comunales¹³, en la salud mental¹⁴, en la vida de las mujeres¹⁵ y en la memoria pública¹⁶. No obstante, aún no se conoce en profundidad cómo es que la vida de estas comunidades es reestructurada por el desplazamiento. Algunos observadores políticos coinciden en que uno de los mayores retos de Colombia en el despuntar del siglo XXI es el de entender el verdadero alcance de las consecuencias políticas y sociales de estos éxodos masivos¹⁷. Bajo este panorama ¿por qué entonces el desplazamiento de esta crisis de las estadísticas oficiales del Estado? ¿Por qué se mantiene oculto este dramático flujo demográfico del escrutinio del censo? ¿Por qué se excluye a los desplazados del proyecto de construcción de nación? ¿Por qué se les desplaza de los campos simbólicos y representativos del aparato estatal? ¿Cuáles son los efectos políticos de esta persistente anulación?

Al tratar de entender las fuerzas que subyacen esta anulación, encuentro útil preguntar ¿qué significaría para el Estado la inclusión de los desplazados como sujetos activos en la construcción del proyecto de nación? Ante todo significaría reconocer la fragmentación política y territorial del país y con ello implícitamente aceptar el fracaso cultural del propio Estado para visualizar una "comunidad imaginada" viable, esto es, entender la nación como un espacio de extrañamiento, diferencia, fragmentación y exclusión y no como una sola totalidad, inteligible y ordenada. En términos políticos sería reconocer que la nación vive una guerra civil. Pero tal reconocimiento parece demasiado amenazante para continuar sosteniendo un statu quo cada vez más inestable, demasiado disruptivo de aquellas visiones que todavía se aferran a un mundo ya hace tiempo perdido. Como en Macondo, el Estado también construye artefactos para representar y ordenar la realidad, léxicos que hacen del caos

12 García Márquez, G. *Cien años de soledad*, Barcelona, Plaza y Janés, 1975, Pág. 48.

13 Cardoso, R.J. "Experiencia en la recepción de una comunidad desplazada por la violencia en Ibagué", 1997.

14 Castaño, B.L. "El desplazamiento y su problema psicosocial", Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1997.

15 Otero, Y et al., "Diagnóstico urbano y primera interpretación de los cambios socioculturales de las mujeres desplazadas en la ciudad de Montería", Montería, Corporación María Cano, 1995; Universidad Nacional de Colombia, *Mujeres desplazadas y violencia*, Bogotá, 1996

16 Villaveces, S. "Art and Media-tion: Reflections on violence and Representation", en G. Marcus, ed. *Cultural Producers in Peribus States*, Chicago, University of Chicago Press, 1997.

17 Pecaut, D. "Los desplazados: un problema social y político", en *Colombia-Thema*, No. 5, 1999, página en Internet: <http://colombia-thema.org/mai99/covuntura-primero99.htm>

algo inteligible, reconocido y nombrado. Al evitar que los desplazados entren en los reinos de estos léxicos oficiales el Estado protege su propia vulnerabilidad: sin la fuerza disruptora de la anomalía, el espejismo de un Estado en control se mantiene como real y con él, las imágenes y proyecciones oficiales de una nación menos violenta y fragmentada de lo que realmente es. Como en Macondo, la miopía política del Estado premia el rendirse al encanto de vivir de la ilusión. Pero este encantamiento trae consigo también barreras profundas que minan las posibilidades reales para una democracia: la "invisibilidad oficial" de la crisis, al subestimar la magnitud del desplazamiento forzado en Colombia, ha servido para desautorizar la ya marginalizada gestión de los defensores de derechos humanos, sin mencionar la de los propios desplazados.

La ausencia de estadísticas oficiales, al posponer del debate político la crisis, sus orígenes y consecuencias, ha hecho impermeable al Estado a que dé cuenta de sus silencios. Al dominar este doble juego de significación el Estado presenta públicamente construcciones retóricas que parecen dar cuenta de la crisis, mientras que simultáneamente evita que ésta entre en su campo de visión. Esto es lo que entiendo como la "invisibilidad oficial" del desplazamiento forzado. Y este doble juego de significado teje intrincados nudos que bloquean tanto a las organizaciones no gubernamentales como a las propias poblaciones desplazadas. El gobierno, mientras que presenta como verídica la fabricada solidaridad de las Altas Comisiones para con la crisis, actúa bajo su propio autoritarismo para preservar un sentido del orden ya perdido. Esta capacidad para arrasar con la diferencia, mientras que se apropia para sí de los discursos del Otro (organizaciones no gubernamentales y desplazados), persigue a este mismo Otro como encarnación de fuerzas destructoras, como anomalía que pone en peligro la misma existencia de ese orden imaginado. ¿Y de qué otra manera podría ser si las respuestas del Estado colombiano a la violencia se han fundado siempre en narrativas auto-referenciales que anulan la diferencia? Para el Estado se hace imposible integrar la escena de los desplazados a su propio teatro histórico, simbólico y narrativo. "Visto desde el interior del orden simbólico, el objeto aparece como un irreducible/constitutivo Extraño, como un arrecife que curva el espacio simbólico, que perturba el circuito simbólico; como un trauma que no puede ser integrado a él [al espacio simbólico], [como] un cuerpo ajeno que previene que el orden simbólico se constituya plenamente en sí mismo. es a través de su 'repetición', a

través de sus ecos dentro de la estructura significativa, que la causa se convierte retroactivamente en lo que siempre - ya era"¹⁸... un Extraño.

Bajo estas intrincadas redes de cultura y poder, donde la invisibilidad estructural sirve una multiplicidad de propósitos, ¿podrían las variables del censo ofrecer herramientas para inscribir a los desplazados como agentes políticos? A mediados de junio de 1999, alrededor de 10.000 refugiados escaparon del Catatumbo hacia la vecina Venezuela en un intento por huir de la violencia paramilitar. Este nuevo desplazamiento masivo de civiles colombianos volvió a atraer la atención internacional hacia la vulnerabilidad de las poblaciones rurales del país. El gobierno de Venezuela no esperó para referirse a la situación colombiana como el Kosovo latinoamericano, añadiendo otra dimensión a las ya enrarecidas relaciones con Colombia¹⁹. Casos como este han situado el desplazamiento forzado en la agenda política del país, infortunadamente no con la seriedad que exige su propia complejidad. Las expectativas crecientes de un recrudescimiento de la violencia, y por consiguiente del desplazamiento forzado, proveen irónicamente la única esperanza para un compromiso real de las agencias estatales] y las esferas de toma de decisión para con la crisis. Si este

18 Zizek, S. *The Metastases of Enjoyment Six Essays on women and causality*, Londres, Verso, 1994, Págs. 31-32.

19 La referencia a Colombia como el próximo Kosovo se está usando con creciente frecuencia en círculos internacionales, sumándose a la ya popular denominación del caos político del país como una balcanización criolla. En junio de 1999 un periodista de *El Tiempo* citó a Paúl Coverdale, senador republicano en el Congreso de EE.UU.: "Estamos viendo una balcanización de Colombia. El presidente Pastrana sigue haciendo concesiones a las que a cambio han aumentado sus esfuerzos para minar la paz y la estabilidad. A fin del año saldremos de Panamá y esto afectará dramáticamente nuestra habilidad para luchar contra el narcotráfico así como para garantizar la seguridad y estabilidad en la región". (Gómez Masseri, "Panamá ame da por Colombia", en *El Tiempo*, 1999, pág. 1A.) Haciendo eco a argumentos de esa índole el Congreso norteamericano aprobó este año un aumento significativo en la ayuda militar para Colombia. Hoy Colombia está entre los tres primeros países que reciben mayor ayuda militar, sólo superada por Israel y Egipto (R. Peñaranda y J. Zuluaga, "La guerra se intensificará", en Colombia Thema No. 5, 1999). Esta imagen de una Colombia balcanizada ha abierto hoy el camino a la nueva metáfora ya común a lo largo y ancho del continente: la colombianización de América Latina. Una imagen que capturar el miedo de la región a un colapso institucional, si no social, bajo la presión de sistemas paralelos de distribución de orden y justicia. Balcanización de Colombia, colombianización de América Latina, las dos imágenes capturan de manera poderosa los límites de las explicaciones locales a la violencia diseminada; ambas evocan crudamente los fracasos de nuestros estados ahora más profundizados por el impacto creciente de la globalización y los ajustes neoliberales, así como por su incapacidad para consolidar sus funciones primarias de proveedor de justicia y seguridad (fallas que de he atraviesan todos los Estados de América Latina y que tienen en Colombia manifestación extrema).

compromiso ocurriera, los 1.5 millones de desplazados tendrían que conquistar un lugar en el campo de visión del Estado. Este cambio de status de los desplazados necesariamente llevaría tanto a su reinscripción como actores sociales con agenciamiento político propio, como a su reconocimiento como hitos y partícipes legítimos en la construcción de una nueva topografía de la nación. Una topografía que para ser entendida apropiadamente tiene que enfrentar los efectos políticos, culturales, sociales y

económicos del desplazamiento forzado²⁰. Sólo entonces, es de esperar, se podría pensar en un nuevo proyecto de nación, uno que rompa con esa maldición macondiana que mezcla en una alquimia trágica la desmemoria y espejismos de muchos con la ambigüedad de unos pocos. Como en *Cien años de soledad*, el intento de recuperar la memoria colectiva del mundo se logra nombrando, y en el mundo de la burocracia nombrar se hace, entre otras formas, a través de las gramáticas del censo.

20 Para la re-inscripción del agenciamiento político de las comunidades desplazadas así como para tener una mayor perspectiva de los efectos culturales, sociales y políticos que el desplazamiento genera creo de vital importancia la necesidad de articular la reflexión social sobre la diáspora colombiana con reflexiones sobre las diásporas en Medio Oriente y en África. Véase al respecto por ejemplo R. Chow, *Writing Diaspora: Tactics of Intervention in Contemporary Cultural Studies*, Bloomington, Indiana U. Press, 1993. Farah, R. *Popular Memory and Reconstructions of Palestinian Identity*, Tesis PhD. Universidad de Toronto, 1999. Lavie, S. y Swedenburg, I, Eds. *Displacement, Diaspora, and Geographies of Identity*, Durham, Duke University Press, 1996. Shami, S. (ed.) *Population Displacement and Resettlement: Development and Conflict in the Middle East*, New York, Center for Migration Studies, 1994. Malkki, L. "Refugees and Exile: From Refugee Studies to the National Order of Things", *Annual Review of Anthropology*, 24, Págs. 495-523, 1995. Malkki, L. "Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization", *Cultural Anthropology*, vol. 11, No. 3, Págs. 377-404, 1996. Zetter, R. "Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity", *Journal of Refugee Studies* vol. 4 No. 1, 1991, Págs. 39-62.